



Dirección General de Integración

CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuroFinanciado como parte de la respuesta de
la Unión a la pandemia de COVID-19

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL “ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO Y ALOJAMIENTO PARA JÓVENES DE 18 A 21 AÑOS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020, FONDOS REACT- UE.”

I.- ÁMBITO COMPETENCIAL Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN.

La Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 26.1.24 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tiene atribuida competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud. En particular, dentro de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social corresponde a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, entre otras funciones, el impulso de políticas de protección al menor y a la familia, así como la promoción de recursos y actuaciones dirigidos a la consecución del bienestar social de la infancia y la adolescencia y el impulso de la investigación para un mejor conocimiento de la situación y problemas de la infancia, la adolescencia y la familia en la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Por tanto, a través de esta Dirección General se presta atención inmediata a todo menor, incluidos aquellos respecto de los cuales no pueda ser establecida su mayoría de edad, en aplicación de lo previsto en la ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, por lo que los centros de acogida siguen suponiendo un lugar de llegada de menores o posibles menores que requieren de atención.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 9.3 del Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, a la Dirección General de Integración le corresponde en materia de inclusión social, *“el impulso de políticas de servicios sociales en relación con las personas y grupos en situación o riesgo de exclusión social, personas sin hogar, inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos de población en situación de necesidad o de vulnerabilidad social, así como la gestión de las prestaciones que, en su caso, se deriven de las mismas”*.

La concurrencia de competencias entre Direcciones Generales de la misma Consejería sobre los mismos usuarios hace que la colaboración deba ser intensa por el bienestar de estos jóvenes y legitima sus intervenciones en el desarrollo del servicio desde sus respectivos ámbitos, para dar continuidad al trabajo desarrollado cuando eran menores.

La experiencia de la Comunidad con los jóvenes protegidos pone de manifiesto que, al alcanzar la mayoría de edad y cesar, en consecuencia, la acción jurídica protectora, ha de hacerse un tránsito a la vida adulta acelerado y comprimido, agravado por las circunstancias familiares y sociales que dieron lugar a la medida de protección. El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta, sin duda especialmente *“vulnerable”*, por doble partida, por escasez de recursos personales, y por la inexistencia, o presencia limitada, de un entorno social y familiar que ofrezca los apoyos necesarios y agravado, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial.

Por otro lado, la edad de emancipación, en gran parte de los países de nuestro entorno, se ha ampliado hasta casi los 30 años y la crisis económica y social afecta, en mayor medida, a la empleabilidad de los jóvenes. Todo ello posiciona al colectivo de extutelados en una situación de desigualdad respecto del resto de jóvenes de su edad, por lo que se impone que puedan contar con apoyo social y educativo, así como con alojamiento y manutención, que faciliten el tránsito a la vida adulta para todos aquellos que lo necesiten.

El **Informe sobre la Vulnerabilidad Social ‘Personas Jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social’**, realizado por Cruz Roja en el mes de septiembre del 2020 ilustra que el 84% de los jóvenes extutelados atendidos en el marco de colaboración con la Comunidad de Madrid, se encuentra en riesgo de pobreza y



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1239698624887268191868**

exclusión. El 81,5% está en paro, el 84% no recibe ninguna prestación o subsidio, un 10% se ve obligado a vivir en la calle o en situación de alta precariedad o que el 55% no tiene a nadie que le exprese afecto, cariño o acompañe. El 31% son españoles y el 66% extranjeros extracomunitarios.

Investigaciones, tanto a escala nacional como internacional, coinciden contundentemente en estas particulares dificultades que afrontan los jóvenes procedentes del sistema de protección, y la necesidad, por tanto, de apoyos más allá de los 18 años hasta los 21 como mínimo.

De hecho, cada día existe mayor interés y atención de los poderes públicos a este respecto, tanto a escala europea, como estatal y autonómica. Buena prueba de ello son los Programas Operativos del Fondo Social Europeo de la Estrategia Europea 2020, los nuevos objetivos políticos y específicos del Fondo Social Europeo Plus en el marco del período de programación 2021- 2027, los objetivos operativos definidos por los Planes Estratégicos de las distintas Administraciones Públicas, así como la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, que actualizan diferentes cuerpos legislativos, para adecuarlos a los cambios sociales producidos en los últimos años así como a la normativa internacional reciente. En particular, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor contempla ahora, **en su artículo 22 bis, que las Entidades Públicas habrán de ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad**, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. En la misma dirección ha ido la normativa y los planes estratégicos de los que han ido dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas

Para dar respuesta a esta necesidad social, la Comunidad de Madrid, ha implementado el **Plan de Autonomía Personal 16-21**, destinado a procurar itinerarios que permitan compensar los déficits y mitigar los riesgos de la emancipación precoz y acelerada de estos jóvenes. Este Plan cuenta con dos programas, **el Programa de Autonomía Personal 16-18 y el Programa de Tránsito a la Vida adulta 18-21**. Éste último, para mayores de 18, contempla ampliar el acompañamiento y seguimiento de los jóvenes del sistema de protección, hasta al menos los 21 años, para que cuenten con los recursos sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión social. Para ello, se han identificado tres áreas de intervención: alojamiento y manutención, inserción sociolaboral e intervención familiar.

Por todo lo anteriormente expuesto, la ahora Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad articuló con entidades de la iniciativa social, coincidentes en sus objetivos con las competencias de la Administración, una serie de convenios para fomentar la colaboración mutua y prestar la atención a los jóvenes que, habiendo pertenecido al sistema de protección infantil, cumplieran la mayoría de edad y se encontraban en situación de dificultad y desventaja social, para procurar su tránsito a la vida adulta en condiciones satisfactorias que les permitiera alcanzar la plena autonomía y prevenir el riesgo de exclusión social, trabajando para que todos tengan igualdad de oportunidades, desarrollando su potencial y fomentando su responsabilidad social, apoyando sus procesos de formación e inserción laboral.

Actualmente, hay 115 plazas concertadas con 16 entidades diferentes y financiadas, tanto por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (102 plazas), como por la Dirección General de Integración (13 plazas) con plena ocupación.

II.- CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA.

Como es de sobra conocido, desde la declaración, el pasado 30 de enero, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la situación de emergencia de salud pública internacional en relación con el coronavirus COVID19 y su calificación el día 11 de marzo como pandemia global, las Administraciones Públicas han ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, a contener la progresión de la enfermedad y a reforzar el sistema de salud pública.



Como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el brote de coronavirus (COVID 19), por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el primer Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria. Asimismo, se emitieron diversas órdenes y recomendaciones por las autoridades competentes para la minimización de la propagación del virus, sobre todo, entre colectivos vulnerables.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 elaboró un Documento técnico de recomendaciones de actuación desde los Servicios Sociales ante la crisis por COVID-19 que prescribía la necesidad de contratar servicios de atención a personas vulnerables atendidas por los Servicios Sociales Públicos de nuestro territorio, pensando fundamentalmente en personas mayores y dependientes, así como en el caso de las personas sin hogar.

Entre las recomendaciones incluidas en este documento se señala que considerando los riesgos implícitos en los procesos de emancipación que tienen lugar cuando se cumple la mayoría de edad, y que se multiplican en la actual situación de emergencia *se prorrogará la estancia de los jóvenes tutelados que alcancen la mayoría de edad, siempre y cuando voluntariamente decidan continuar, hasta que finalice este período de emergencia y/o se ampliará el número de plazas en los dispositivos residenciales de los Programas de Autonomía o Transición a la Vida Adulta para los jóvenes susceptibles de incorporarse al programa.*

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad ratificó esta medida a través de una instrucción elaborada al efecto. En consecuencia, durante los meses de vigencia del Estado de Alarma se mantuvieron en los recursos de acogimiento residencial de menores a un número importante de los jóvenes que habían alcanzado la mayoría de edad en este periodo, al no disponer de un alojamiento adecuado y ante la imposibilidad de ser derivados a los recursos para jóvenes ex-tutelados que tampoco han podido dar salida a sus residentes.

Esta situación provocó importantes disfunciones en la actividad de los centros de protección además de la elevación de los índices de ocupación de éstos por encima de lo deseable, complicando la situación en la que ya se encontraban estos recursos antes de la crisis sanitaria, por sus elevados índices de ocupación. Asimismo, el hecho de que plazas que normalmente deberían destinarse a niños, niñas y adolescentes con medidas de protección estén siendo utilizadas por jóvenes que ya han alcanzado la mayoría de edad, entorpecía el normal funcionamiento del sistema de protección de menores.

Normalizada ya la situación, tenemos 136 plazas a plena ocupación destinadas a estos jóvenes (10 de ellas destinada a jóvenes con discapacidad y otras 13 plazas en pisos de titularidad pública) y teniendo en cuenta que aproximadamente cada año cumplen la mayoría de edad 100 menores.

III.- VENTAJAS DEL INSTRUMENTO DEL ACUERDO MARCO

No obstante, en razón de la naturaleza de estos procedimientos (convenios administrativos), no ofrecen la estabilidad necesaria para trabajar la autonomía con estos jóvenes, por lo que se da la oportunidad de dar continuidad al trabajo que se realiza con jóvenes tutelados por la Comunidad de Madrid, a través de la convocatoria de un Acuerdo Marco, que permitirá, no solo optimizar los recursos que se invierten durante su minoría de edad (la no continuidad del proceso, en algunos casos, supone que la inversión pública realizada en esos menores no es eficiente ni eficaz), sino lo que es más importante, dar estabilidad emocional a los menores amparados por la Red, lo que favorecerá su integración en la sociedad adulta de manera más fácil.

También se hace necesaria una homogeneización de las condiciones de la prestación, a fin de garantizar la igualdad a los usuarios y una racionalización del sistema desde el punto de vista administrativo, dando a todas las plazas disponibles el mismo tratamiento en cuanto a su forma de concertación (convenio/contrato) así como a su seguimiento. Se considera, asimismo, que el sistema de contratos basados en el Acuerdo Marco economiza la gestión administrativa, gracias a la unificación en un procedimiento de los trámites necesarios, pudiendo disponer de forma inmediata de una bolsa de licitadores y logrando una contratación más ágil y eficiente.



Por otra parte, y con el objetivo de favorecer la concurrencia de empresas y, sobre todo, de entidades de iniciativa social e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos propios, resulta conveniente la licitación de un total de 120 plazas.

En conclusión, el Acuerdo Marco tiene importantes ventajas, frente al sistema de concertación de plazas que se realizaba anteriormente (convenios de colaboración y contratos de emergencia). En concreto:

1) **Respecto a la prestación del servicio.**

- Se da continuidad a los proyectos de intervención que se desarrollan antes de cumplir la mayoría de edad.
- El aumento de los mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones durante la ejecución de los contratos, así como la actividad centralizadora y coordinadora de la Administración, fomentará la calidad de la atención prestada a los mismos en cada uno de los centros.

2) **Respecto al procedimiento de contratación.**

- Homogeneidad. Se trata de establecer un marco único de actuación para las empresas y entidades que prestan servicio en este tipo de recursos, desde la perspectiva contractual.
- Simplificación y agilización del procedimiento de licitación y adjudicación de los contratos basados. Durante el desarrollo del Acuerdo Marco, la contratación se realiza de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a nueva licitación y sin tener que realizar prórrogas anuales de recursos actuales, sujetas a disponibilidad presupuestaria.

3) **Respecto al presupuesto de licitación.**

- Se considera que el presupuesto de licitación de la plaza ocupada/día está equilibrado respecto al precio real de mercado de las plazas de acogimiento residencial, lo que permitirá obtener una homogeneización de las ofertas presentadas por los licitadores.

IV.- ENCAJE EN PROYECTOS EUROPEOS.

Por lo que se refiere a la financiación de este Acuerdo Marco, el coste se imputará al Programa presupuestario 232G "Integración Social y Prestaciones Económicas", cuya gestión es responsabilidad de la Dirección General de Integración, si bien, se ha solicitado su cofinanciación por fondos europeos, a través del **EJE REACT-EU "FAVORECER LA REPARACIÓN DE LA CRISIS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES Y PEPARAR UNA RECUPERACIÓN VERDE, DIGITAL Y RESILIENTE DE LA ECONOMÍA"**, cuyo objetivo específico es el apoyo al acceso al mercado de trabajo personas en situación de vulnerabilidad.

En definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un para la gestión del "Acompañamiento educativo y alojamiento para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de protección de la Comunidad de Madrid", a fin de satisfacer las necesidades planteadas.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE
INTEGRACIÓN

Fdo.: Dolores Navarro Ruiz

